

El PRC reclama al Gobierno un plan de acción para la inclusión social con el objetivo de reducir la tasa de pobreza y situarla por debajo de la media nacional

Rosa Díaz propone un acuerdo en el Parlamento para agilizar y aumentar las ayudas e intensificar las políticas de apoyo a los colectivos más vulnerables

Santander, 26 de octubre de 2024

La diputada y portavoz del PRC en materia de Inclusión Social, Rosa Díaz, defenderá en el Pleno del próximo lunes una proposición no de ley para urgir al Gobierno de Cantabria a aprobar un plan de acción que impulse la reducción de la tasa de pobreza en la Comunidad Autónoma y contribuya a situarla cuatro puntos por debajo de la media nacional en los 3 próximos años, con medidas en todos los ámbitos de actuación y la colaboración de las entidades públicas y privadas que atienden a las personas en situación de vulnerabilidad.

Díaz pide además la tramitación anticipada de todas las convocatorias de ayudas dirigidas a la inclusión social y un impulso de las políticas dirigidas a los colectivos más afectados por la pobreza y la inclusión, con programas específicos para jóvenes, mujeres, desempleados de larga duración, mayores de 45 años y personas con discapacidad.

Del mismo modo, aboga por incrementar las ayudas y las prestaciones sociales dirigidas a las personas que viven por debajo del umbral de la pobreza, “ajustando su cuantía a las necesidades reales de las familias cántabras y simplificando los trámites administrativos para facilitar el acceso a las mismas”.

Las propuestas del PRC responden al incremento de las tasas de pobreza que está viviendo Cantabria, donde la pobreza afecta a un 22% del total de la población y afecta a un 15 por ciento de la ciudadanía ocupada y a un 53 por ciento de los desempleados, según la tasa AROPE y el último informe elaborado por UGT con motivo de la Jornada Mundial por el Trabajo Decente.

Rosa Díaz asegura que estos datos reflejan “una realidad muy preocupante”, no sólo por el crecimiento de los índices generales de pobreza, sino también por su incidencia entre las personas ocupadas, cuyo riesgo de exclusión “ha alcanzado su nivel más alto de los últimos tres años”.

“El riesgo de pobreza y exclusión social afecta a un porcentaje cada vez más significativo de la población activa”, ha advertido la parlamentaria regionalista, quien considera “urgente” la necesidad de adoptar medidas para frenar esa tendencia y “reducir el número de cántabros que sufren privación material severa”.

En este sentido, ha destacado que Cantabria es una de las seis comunidades autónomas donde ha aumentado la proporción de personas en viviendas con baja intensidad de empleo, con una de las tasas más altas del país “y más de un punto por encima de la media nacional”. “Ya son 43.000 los cántabros que viven esa situación y continuarán aumentando si no tomamos medidas drásticas para reducir esa tendencia”, ha explicado la diputada regionalista.

Finalmente, ha destacado que estos datos coinciden con la reducción del desempleo que ha vivido en los últimos meses la Comunidad Autónoma, lo que evidencia que la calidad del empleo y el bajo nivel de ingresos “continúan siendo problemas estructurales e impiden a muchas familias salir de la situación de vulnerabilidad económica en la que se encuentran y superar la situación de riesgo social”.